



DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA

Rama del Derecho: Derecho Penal.	Descriptor: Derecho Penal Especial.
Palabras Claves: Asociación Ilícita, Sala Constitucional Sentencia 6225-02, Sala Tercera Sentencias 939-03, 760-05, 1254-05, 808-07, 271-09, Tribunal de Casación Penal de San José Sentencias 51-02, 201-07, 373-07 y Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal de Cartago Sentencia 244-14.	
Fuentes de Información: Normativa, Doctrina y Jurisprudencia.	Fecha: 02/12/2014.

Contenido

RESUMEN	2
NORMATIVA	2
Delito de Asociación Ilícita	2
DOCTRINA	3
El Delito de Asociación Ilícita: Acción	3
Sujetos	3
i) Activo.....	3
ii) Pasivo.....	4
Elementos Subjetivos.....	4
Elementos Normativos.....	4
i) Asociación	4
ii) Terrorismo.....	4
Bien Jurídico Tutelado	5

JURISPRUDENCIA.....	5
1. La Asociación Ilícita como Delito Doloso Plurisubjetivo	5
2. Sobre el Concepto Jurídico “Grupo Organizado”	6
3. Elementos de Configuración del Tipo Penal de Asociación Ilícita	9
4. Naturaleza de la Asociación Ilícita	10
5. Extradición y Delitos de Asociación Ilícita y Conspiración	13
6. Asociación Ilícita y Confección de Documentos Falsos	18
7. Aspectos a Considerar en la Configuración del Delito de Asociación Ilícita.....	21
8. Indicios Válidos para Determinar la Comisión del Delito de Asociación Ilícito.....	23
9. Constitucionalidad del Delito de Asociación Ilícita	25
10. Asociación Ilícita y Delito de Robo	27

RESUMEN

El presente informe de investigación contiene jurisprudencia y doctrina sobre el **Delito de Asociación Ilícita**, considerando los supuestos del artículo 281 del Código Penal.

NORMATIVA

Delito de Asociación Ilícita [Código Penal]ⁱ

Artículo 281. **Asociación ilícita.** Será reprimido con prisión de uno a seis años, quien tome parte en una asociación de dos o más personas para cometer delitos, por el solo hecho de ser miembro de la asociación.

La pena será de seis a diez años de prisión si el fin de la asociación es cometer actos de terrorismo o secuestro extorsivo.

(Así reformado por el artículo único de la Ley N° 8127 de 29 de agosto del 2001).

(Así modificada la numeración de este artículo por el numeral 185, inciso a), de la ley No.7732 de 17 de diciembre de 1997, que lo traspasó del 272 al 274).

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la Ley N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspasó del antiguo artículo 274 al 281, "Reforma de la Sección VIII, Delitos Informáticos y Conexos, del Título VII del Código Penal").

DOCTRINA

El Delito de Asociación Ilícita: Acción

[Garro Canessa, J.]ⁱⁱ

“En nuestro criterio la expresión “tomar parte” es sinónimo del verbo participar, y en el caso concreto, participar en una asociación, constituye también la acción de asociarse o afiliarse a ella. Así entonces, podemos señalar que la conducta típica en este delito consiste en participar o asociarse en una asociación con fines delictivos, lo cual significa unirse voluntaria y permanentemente para conseguir con voluntad y actividad colectivas el fin común.

Sujetos

i) Activo

[Rivera Quesada, L. y Salazar Sánchez, A.M.]ⁱⁱⁱ

“El sujeto activo en este tipo es indeterminado, pues no se requieren cualidades específicas para ser autor del delito. Por otra parte, nos encontramos frente a un delito plurisubjetivo o de participación necesaria, ya que el tipo requiere la concurrencia de al menos dos personas.(...)”

Se es autor del delito de asociación ilícita por el solo hecho de ser miembro de la misma, sin tomar en cuenta la actuación de los partícipes y sin distinguir entre los diferentes papeles que cada individuo pueda tener dentro de la asociación; basta, entonces, con que haya voluntad de pertenecer al grupo.

ii) Pasivo

[Garro Canessa, J.]^{iv}

“En algunos delitos la determinación del sujeto pasivo como titular del bien jurídico tiene importancia para los efectos de establecer el consentimiento del derecho habiente. En el delito de asociación ilícita no es posible tal consentimiento, ya que las potestades, ya que las potestades del estado son irrenunciables y, por lo tanto, el estado no puede consentir que otra institución, la asociación criminal, pueda realizar fines contrarios y atentatorios contra su propio poder.”

Elementos Subjetivos

[Garro Canessa, J.]^v

“Junto al dolo, el cual constituye el núcleo de lo injusto personal de la acción en los hechos dolosos y como tal el elemento subjetivo general del tipo, pueden concurrir también determinados elementos subjetivos especiales que integrarán lo injusto personal de la acción. Dichos elementos subjetivos tienen por objeto caracterizar la voluntad de actuar del autor en un determinado sentido.(...) Así podemos afirmar que el tipo subjetivo de este delito requiere de ese especial propósito o finalidad delictiva; no basta con que el sujeto participe en una asociación criminal simplemente, sino que además es necesario que su conducta esté dirigida hacia la realización de hechos punibles.”

Elementos Normativos

i) Asociación

[Rivera Quesada, L. y Salazar Sánchez, A.M]^{vi}

“Esto significa que la colectividad es su globalidad debe pretender la comisión de delitos para que se configure este delito, no la intención de alguno o algunos de sus miembros: “no es la intención o propósito del socio lo que decide la tipicidad, sino la naturaleza del “objeto social”.”

ii) Terrorismo

[Rivera Quesada, L. y Salazar Sánchez, A.M]^{vii}

“Siguiendo a Peña Cabrera, ante la ausencia de elementos objetivos que nos permitan delimitar el concepto de terrorismo, afirmamos que lo decisivo para calificar una acción como terrorista es el móvil político, porque, externamente, el atentado terrorista no se distingue del delito común.”

Bien Jurídico Tutelado

[Rivera Quesada, L. y Salazar Sánchez, A.M]^{viii}

“...si hacemos un análisis formal el Código Penal, podemos deducir que el delito de asociación ilícita protege el bien jurídico “Tranquilidad Pública”. (...) La doctrina sostiene diversas posiciones al respecto; predominan aquella que señalan el orden público o la tranquilidad pública como el bien jurídico tutelado, pero también se indica el Estado mismo o los diferentes bienes jurídicos que se lesionarían si se cumple el programa delictivo de la asociación.

[Garro Canessa, J.]^{ix}

“Nuestra posición sostiene que el objeto de la protección penal en el delito de asociación ilícita se encuentra en el Estado, en la tutela de la seguridad y poder del mismo, por lo que somos partidarios de la última concepción doctrinal expuesta.

Consideramos que el Estado como institución, que coordina y regula las relaciones de la comunidad, se encuentra amenazado –y porqué no lesionado?- por la existencia de comunidades organizadas que representan un conjunto de energías evidentemente antisociales, al difundir valores totalmente antagónicos al orden establecido por el mismo Estado.(...) Por último, creemos que el valor que protege este delito sólo lo podemos descubrir si miramos el problema, no desde la perspectiva de la participación de un conjunto de personas en la ejecución de hechos ilícitos, sino de la institucionalización de una organización o estructura criminal, la cual por su naturaleza tiende a realizar su propio ordenamiento, en descrédito del estatal.”

JURISPRUDENCIA

1. La Asociación Ilícita como Delito Doloso Plurisubjetivo

[Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago]^x

Voto de mayoría:

“**V.** [...] El tipo penal de asociación ilícita previsto en el numeral 281 del Código Penal establece que *"Será reprimido con prisión de uno a seis años, quien tomare parte en una asociación de dos o más personas para cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación"*. El delito de asociación ilícita es un delito

doloso plurisubjetivo, en el tanto debe ser realizado por al menos dos personas que se agrupan con el conocimiento de que el objetivo es cometer delitos y con la voluntad de formar parte de dicho grupo. No es necesaria una constitución formal, mediante pacto expreso, sino que puede hacerse de manera tácita, por medio de conductas que inequívocamente reflejen el ánimo de formar parte de la agrupación delictiva. Para incurrir en el delito de asociación ilícita no es necesario que se participe directamente en ejecutar los hechos punibles, bastando con participar de cualquier manera en el funcionamiento de la misma. Lo que se sanciona es la pertenencia al grupo, independientemente de la participación individual en cada uno de los hechos atribuidos al grupo. Para tener por demostrado el delito de asociación ilícita es necesario que exista una estructura organizativa y debe tender a la permanencia. Es característica del delito de Asociación Ilícita que el acuerdo lo es para cometer delitos en abstracto, mientras que el acuerdo o convergencia para delinquir, los es para participar en la comisión de uno o varios delitos concretos (cfr. Sala Tercera, voto N° 885-2001 de las 08:45 horas del 14 de septiembre de 2001 y voto N° 760-2005 de las 10:20 horas del 08 de julio de 2005). De acuerdo con la doctrina, la acción típica consiste en formar parte de una asociación cuyo objetivo sea el de cometer delitos. No se trata de exigir la indeterminación de los delitos cuya comisión se propone la asociación, sino que se tenga como objetivo una pluralidad de planes delictivos que no se agotan en una conducta delictiva determinada o con la concreción de uno o varios hechos. Lo indeterminado no son los delitos sino la pluralidad de delitos. El acuerdo o pacto de los intervinientes de formar parte de la asociación puede ser explícito (expresión de la voluntad en tal sentido), o implícito (se deduce de actividades unívocamente demostrativas de la existencia de la asociación como la realización de gran número de delitos por las mismas personas, con los mismos medios, división de tareas delictivas a través de diversas actuaciones). El acuerdo además debe ser indicativo de cierta permanencia, que es lo que distingue la asociación ilícita de convergencia transitoria respecto de uno más hechos específicos, determinada dicha permanencia por la actividad delictiva plural propuesta por la organización, y de moverse dentro de cierto grado de organización mínima que requiere la cohesión del grupo en orden a la consecución de los fines delictivos comunes (cfr. CREUS, Carlos. **Derecho Penal. Parte Especial**, 4° edición, Buenos Aires, Argentina: Editorial Astrea, 1993, pp. 107 a 109).”

2. Sobre el Concepto Jurídico “Grupo Organizado”

[Sala Tercera]^{xi}

Voto de mayoría

II. Bajo la letra **E)** reprocha que no se fundamentó debidamente la imposición de la pena, ya que se dispuso imponer una sanción de nueve años de prisión, que

prácticamente duplica el mínimo establecido por el tipo penal del artículo 213 del Código Penal, a partir de una fundamentación que si bien no es lacónica, resulta en todo caso insuficiente e ilegítima por omitir aspectos relevantes que de conformidad con el artículo 71 ibidem deben ser considerados, concretamente: la ausencia de antecedentes, que se trata de una persona relativamente joven, que merece una oportunidad para rectificar su conducta mediante la imposición de una pena mínima, sobre todo tomando en consideración el daño mínimo causado. Además, el Tribunal utilizó un argumento que sorprendió a la defensa, al señalar que se estaba en presencia de un grupo organizado no para cometer un hecho, sino donde se arman, obtienen pasamontañas y actúan a lo seguro, buscando impunidad, además de que se trata de una persona extranjera. Lo que estima el gestionante constituye una condenatoria velada contra el imputado por el delito de asociación ilícita que prevé el artículo 274 del Código Penal, conducta que no fue acusada ni discutida durante el proceso o en el debate, de ahí que ese proceder resulta contrario al derecho de defensa y al debido proceso. **El reclamo no resulta atendible.** A efecto de individualizar la sanción aplicable, el Tribunal de instancia deberá apreciar el juicio de culpabilidad recaído, así como los elementos objetivos y subjetivos del hecho punible, la lesión al bien jurídico tutelado, la gravedad de la infracción y las restantes circunstancias a las que alude el artículo 71 del Código Penal. Al respecto, no corresponde en esta sede realizar una revaloración de dichas variables, sino que el control que procede ejercer se circunscribe a constatar la debida fundamentación de las razones vertidas por las Juzgadoras a la hora de individualizar el quantum sancionatorio respectivo, conforme las pautas establecidas legalmente y los principios de razonabilidad y proporcionalidad. En el presente asunto, las Juzgadoras a efecto de imponer la pena, señalaron lo siguiente: *“... Estamos ante la delincuencia de robo porque la sustracción ocurre con el empleo de violencia y además se ubican las agravantes contenidas en los incisos 2 y 3 del numeral 213 del Código Penal, a saber, la utilización de armas de fuego y con participación de más de tres personas, por lo que este hecho debe calificarse como Robo Agravado. A efecto de ubicar la pena que resulta proporcional a la demostración del hecho este Tribunal - conforme el numeral 71 del Código Penal - considera que se trata de un hecho que reviste suma gravedad dada la violencia empleada, es lo cierto que la sola participación de cuatro personas donde tres portan y utilizan armas de fuego, era suficiente intimidación o violencia psíquica sobre Edhin Rosales para someterlo a la voluntad de los delincuentes, de donde la agresión que este señor sufrió y que le ha provocado consecuencias traumáticas, estaba de "sobra", es decir tal agresión materializa el deseo de causar daño, la perversión de los sujetos activos en este hecho y aún cuando el Tribunal no puede identificar claramente la participación del imputado en cuanto a que fuera el causante de tal lesión, es lo cierto que a él le resultan achacables todas las consecuencias del ilícito en que de manera voluntaria decidió participar. También se considera que nos encontramos ante un grupo organizado para cometer este hecho, y*

*tal consideración excede la agravante apuntada del inciso 2 del numeral 213 Cp desde que no se trata de un grupo de personas que acuerdan cometer un hecho, estamos ante una organización, puesto que se arman, obtienen pasamontañas y actúan a lo seguro, buscando impunidad, además de que se trata de una persona extranjera, que ingresó ilegalmente a nuestro país y traiciona la hospitalidad con la comisión de este tipo de fechorías. Las consecuencias del hecho punible fueron altamente reprochables, apuntó E. que no ha podido superar el trauma que el hecho le produjo, donde además debió recibir atención médica y a doña S. se le expone públicamente en una actividad privada que quería mantener en secreto. Inicialmente el Ministerio Público intentó la acusación teniendo a varias personas ofendidas, huéspedes del hotel dicho. Sin embargo al debate se presentaron únicamente dos de esos afectados, por lo que el Tribunal debe concluir que ESAS fueron las únicas personas afectadas, porque la referencia al resto de ofendidos careció de prueba. A todo lo dicho se debe sumar la consideración del dinero sustraído que se ubica en la totalidad del salario que percibía Edhin Rosales. En atención a esas argumentaciones este Tribunal se separa del mínimo de la pena considerado en abstracto por el legislador y opta por imponer el tanto de NUEVE AÑOS DE PRISIÓN, que resultan proporcionales al hecho demostrado.” (folios 120 vuelto y 121 frente). El planteamiento del recurrente parte de la ausencia de ponderación de la “relativa” juventud del acusado y la ausencia de antecedentes penales, unido a su hipótesis de que el Tribunal lo condenó por el delito de asociación ilícita; sin embargo, ello no se deriva del contenido del fallo, en el cual se aprecia que la pena impuesta se fijó en forma fundada, ajustándose a las condiciones personales del imputado J, así como también tomando en cuenta las condiciones objetivas del hecho punible. La circunstancia de que el Tribunal no incluyera en ese apartado del fallo específicamente los aspectos que extraña el recurrente, no significa que no los haya tomado en consideración. Por otra parte, la indicación de que se trata de un grupo organizado, está referida a la planificación en la comisión delictiva, pues no es lo mismo ponerse de acuerdo para cometer el delito y actuar de seguido a proveerse de una serie de elementos como son en este caso pasamontañas y armas de fuego, y mediante un plan previamente concebido actuar sobre seguro, ya que una vez reducido el personal del hotel, haciéndose pasar por el encargado del mismo tocaban a las puertas de las habitaciones y así lograban ingresar al interior de los aposentos y sustraer mediante el uso de las armas que portaban las pertenencias de los huéspedes, y no al supuesto contemplado en el artículo 274 del Código Penal, que sanciona la sola pertenencia a una asociación de dos o más personas, creada con la finalidad de cometer delitos. De manera, que contrario al interés del recurrente, no se observa que por vía indirecta se haya sancionado al justiciable por hechos que no estaban incluidos en la pieza acusatoria. Acorde con lo expuesto, contrario a lo alegado por quien recurre, sí constan los parámetros legítimos que acorde con la calificación jurídica, permitieron determinar la pena a que se hizo merecedor J. En virtud de lo expuesto, **corresponde declarar sin lugar el reclamo.***

3. Elementos de Configuración del Tipo Penal de Asociación Ilícita

[Sala Tercera]^{xii}

Voto de mayoría

“III. Como tercer motivo reclama errónea aplicación de la ley sustantiva, pues se condenó al imputado por el delito de asociación ilícita en concurso material, cuando los hechos no se adecuan a esa figura penal, pues no se dieron los elementos necesarios de permanencia, organización y distribución de funciones, tal y como lo establece la doctrina y la jurisprudencia. **Lleva razón el recurrente.** Como bien lo señala la defensa, el delito de asociación ilícita requiere de diversos elementos para su correcta tipificación. Según se consignó en el fallo, el Tribunal condenó por este ilícito en virtud de que se tuvo por demostrado que el acusado no actuó solo y que la distribución de funciones se demostró por cuanto *“se utilizó un vehículo, al menos un arma de fuego y objetos idóneos para violentar las entradas de las viviendas, pues se demostró que ese fue el modus operandi, indistintamente de quien (sic) condujera el vehículo y quien (sic) utilizara el arma de fuego, y que violentara las entradas.”* (cfr. folio 376). Ya esta Sala ha indicado que no puede equipararse la asociación para cometer delitos, con el acuerdo para participar conjuntamente en la comisión de uno o varios ilícitos (ver en este sentido resolución número 2003-00820 de las 11:25 horas del 18 de setiembre de 2003, en la que también se advirtió que el plan común no es sinónimo de la asociación para delinquir). En cuanto al delito en sí, la Sala ha establecido que *“Es necesario advertir que para que se configure la Asociación Ilícita, el acuerdo de sus miembros debe girar en torno a la intención de cometer delitos, en abstracto, lo cual puede demostrarse por una serie de indicios. Para tener por acaecido el hecho punible en estudio se requiere que exista una estructura organizativa que facilite la ejecución de los ilícitos, así como todas las actividades conexas. Como todo grupo organizado, debe tender a la permanencia en el tiempo, es decir, no puede ser una agrupación fugaz que tiene como objetivo dar un golpe aislado. Sin esos elementos, la conducta punible descrita en el artículo 274 del Código Penal no puede tenerse por acreditada.”* (Resolución 2001-00885 de las 8:45 horas del 14 de setiembre de 2001). En este caso, no encuentra esta Sala que se haya tomado en cuenta la existencia de una estructura organizativa, más allá del simple acuerdo o la tenencia de instrumentos necesarios para cometer los robos. Tampoco se tomó en cuenta –ni es posible extraerlo del material probatorio que fue examinado en el contradictorio– el aspecto referido a la permanencia en el tiempo. Así las cosas, el reclamo se declara con lugar y en consecuencia, se revoca la condenatoria únicamente en cuanto al delito de asociación ilícita. En virtud de que un reenvío para la comprobación de este ilícito resultaría inútil, por cuanto no existen nuevos elementos probatorios, y los que integraron el contradictorio resultan insuficientes, se absuelve de toda pena y responsabilidad al encartado por el delito de asociación ilícita.”

4. Naturaleza de la Asociación Ilícita

[Tribunal de Casación Penal de San José]^{xiii}
Voto de mayoría

“2. [...] Como segundo motivo alega vicios de legalidad esencial en la fundamentación.

i.) La parte dispositiva del fallo es omisa en cuanto a la mención expresa por los delitos que se extradita a su representada, no se indica la calificación legal de los hechos, los cargos debieron encasillarse dentro de las normas penales costarricenses a fin de limitar la extensión de la acusación. Si hubo algún tipo de asociación lo fue para delinquir en una sola dirección, el fraude electrónico. No se conoce ningún otro hecho que estos señores hayan cometido como consecuencia de la asociación.

ii.) Con respecto al lavado de dinero, este es el elemento patrimonial del delito de estafa que describe nuestro Código, por lo que por este hecho la extradición debió ser denegada. No se da ninguna motivación con respecto al delito de Asociación Ilícita, el acuerdo de voluntades para delinquir es parte de la acción típica y antijurídica del delito de Estafa.

iii.) El fallo no contiene individualización alguna respecto a lo que debieron realizar cada uno de los imputados.

iv.) En los cargos que se hace mención no se establece ninguna relación entre las personas involucradas. **El motivo se rechaza.** En el presente caso se aprecia que si se satisface el principio de doble incriminación, mencionándose además los delitos por los cuales se otorga la extradición, pues lo que señala el artículo 2.3 del Tratado de Extradición entre Costa Rica y Estados Unidos es que *"independientemente de que las leyes de ambas Partes Contratantes clasifiquen o no al delito en la misma categoría de delitos o usen la misma o distinta terminología para designarlo"*. La sentencia recurrida que debe ser vista como una unidad jurídica analiza adecuadamente los hechos por los cuales se otorga la extradición, hechos que encuadran dentro de figuras penales citadas en el fallo, según las leyes costarricenses. Sobre este particular ha señalado la Sala Constitucional: *“...Tampoco encuentra la Sala la vulneración que se acusa al principio de doble incriminación, como lo ha sostenido esta Sala en su reiterada jurisprudencia sobre esta materia, el requisito de doble incriminación se satisface si los hechos son delito en ambas legislaciones, con independencia del nombre que en cada uno de ellas tenga...”* (Sala Constitucional, N° 1723 de las 14:39 horas del 28 de febrero de 2001). No corresponde, en ese sentido, hacer una individualización de cada conducta o indicar que determinados hechos se subsumen dentro de específicos tipos penales, según nuestra legislación. En cuanto a la argumentación de que de haber habido alguna asociación lo fue para delinquir en una sola dirección, según señala el

artículo 274 del Código Penal, que define la Asociación Ilícita: *“...Será reprimido con prisión de 1 a 6 años, el que tomare parte de una asociación de dos o más personas para cometer delitos, por el sólo hecho de ser miembro de la asociación. La pena será de 6 a 10 años de prisión si el fin de la asociación es cometer actos de terrorismo o secuestro extorsivo...”*. Doctrinalmente se entiende el delito de Asociación Ilícita como de peligro, que en nuestro medio afecta el bien jurídico la tranquilidad pública, es además un delito plurisubjetivo que requiere la participación de dos o más personas que se asocian para cometer una pluralidad de delitos indeterminados, lo cual implica cierta permanencia dentro de dicha agrupación. De especial relevancia, tal y como se verá es un delito que subsiste con independencia de aquellas delincuencias en particular que realicen los miembros de la organización. Los requisitos para que se configure el tipo penal son a.-) el acuerdo permanente de voluntades para conformar e integrar parte de una asociación ilícita; b.-) un mínimo de dos personas, c.- la indeterminación de los planes delictivos. En lo que respecta al objetivo trazado por la asociación, este está referido a la empresa de cometer varios delitos con la finalidad común de realizarlos. En cuanto al dolo, además del dolo genérico de conocer y querer los elementos del tipo, o sea saber lo que se hace y tener la voluntad para realizarlo, se requiere también el dolo y ánimo específico para esta figura delictiva, caracterizado en su aspecto subjetivo por aquella finalidad particular que el sujeto se propone obtener, pero cuya realización está fuera de los elementos objetivos del tipo. Al ser un delito autónomo, no se requiere la comisión de un delito en concreto, por lo que no lleva razón la petente en su reclamo. [...]

“4. La sentencia recurrida le otorga al país requirente dos meses para que formalice la promesa de que los extraditables no se les impondrá pena de muerte ni cadena perpetua; ni serán juzgados por cargos distintos a aquellos por los cuales ha sido solicitada su extradición, en caso contrario no se otorgará la extradición, por lo que tal requerimiento ya ha sido contemplado en el fallo. Los aspectos de doble incriminación entre el delito de conspiración y asociación ilícita, ya fueron analizados. En todo caso sobre este tema ha señalado la Sala Constitucional: *“...Tampoco encuentra la Sala la vulneración que se acusa al principio de doble incriminación, como lo ha sostenido esta Sala en su reiterada jurisprudencia sobre esta materia, el requisito de doble incriminación se satisface si los hechos son delito en ambas legislaciones, con independencia del nombre que en cada uno de ellas tenga [...] Carece entonces de importancia que en la legislación del estado requirente se hable de ‘conspiración’ y que en algunas de sus significaciones sea posible encontrar un equivalente en nuestra legislación; lo importante es que, como lo señaló el Tribunal de Casación Penal, la figura descrita en aquella legislación encuentre identidad en la nuestra...”* (Sala Constitucional, N° 1723 de las 14:39 horas del 28 de febrero de 2001). En relación con las reglas del concurso, estas no son aplicables, pues los hechos serán juzgados conforme a la normativa del país requirente y en tal sentido no son de aplicación las

reglas del concurso, propias de la legislación costarricense. Con respecto a las objeciones en el sentido de si el Gobierno de Estados Unidos fue estafado o no, lo que se requiere, tal y como se señala en la sentencia recurrida, es que los hechos por los cuales se solicita la extradición sean punibles en ambas jurisdicciones, independientemente de la designación que se le dé a la infracción o dónde se le clasifique y con independencia de que se requiera el uso del correo, del telégrafo o de otro medio que otorgue competencia en Estados Unidos a un Tribunal Federal. La falta de denominación individual de los ofendidos de quienes únicamente se cita las siglas, no es obstáculo para que se proceda a otorgar la extradición, pues los hechos por los cuales son acusados están claramente definidos, y no es necesaria la determinación del grado de participación, propia de nuestra legislación pero no del estado en donde en definitiva serán juzgados. El tema de la jurisdicción también fue resuelto por lo que se remite a lo indicado sobre tal extremo. Consta en el expediente, la existencia de un proceso penal número 06-002136-175 , seguido contra Michael Attilio Mangarella, por el delito de Estelionato, el cual se tramita en la Fiscalía del Segundo Circuito Judicial, por lo que se modifica el fallo recurrido en el sentido de que la entrega de esta persona al gobierno de Estados Unidos, queda diferida hasta que se resuelva en definitiva este proceso. Igualmente reclama el apelante, falta de fundamentación con respecto a la solicitud de devolución de bienes que fueron decomisados en la casa de la esposa del encartado Atilio Mangarella y propiamente se refiere a una caja fuerte decomisada por la policía judicial según acta de decomiso número 400931. En relación con los bienes decomisados tanto el artículo 18 del Tratado y 10 de la ley de extradición, establecen la entrega de los bienes decomisados al país requirente cuando tengan relación con el delito, de modo que si es posible discutir en un proceso de extradición tanto por las partes como por terceros que se vean afectados en sus derechos, lo relativo al decomiso de bienes a fin de determinar si los mismos están relacionados o no con determinado delito. En el presente caso, el a-quo omitió pronunciarse con respecto al decomiso de la mencionada caja fuerte, al indicar que no existía registro del decomiso del citado bien. No obstante la defensa del extraditable ha demostrado suficientemente que efectivamente se produjo tal decomiso, además tal decomiso se dio con ocasión a la existencia de este proceso de extradición, al momento en que fue detenido el señor Atilio Mangarella, por lo que se revoca la resolución recurrida en este extremo, debiendo el tribunal de mérito, previa audiencia a las partes interesadas resolver sobre el decomiso de la caja fuerte descrita en el acta de decomiso número 400931.”

5. Extradición y Delitos de Asociación Ilícita y Conspiración

[Tribunal de Casación Penal de San José]^{xiv}

Voto de mayoría

“I. Recurso de apelación del licenciado José Enrique Castro Marín, abogado representante de la Procuraduría General de la República (folios 2897 a 2901). Como único motivo de agravio, el representante de la Procuraduría General de la República reclama errónea aplicación de las reglas de prescripción, en tanto la resolución de instancia rechazó los cargos 78 y 79 atribuidos al extraditable Preston porque se consideró que éstos estaban prescritos. Quien impugna señala que fue un error del Juzgador aplicar las reglas de prescripción de nuestra legislación procesal cuando, según el Tratado de Extradición con los Estados Unidos, debió tomar en cuenta solamente las leyes del Estado requirente (artículo 7 del mismo). Señala que incluso la Sala Constitucional ya se ha pronunciado sobre este tema aceptando como válido que las reglas de prescripción que deben aplicarse sean las del Estado requirente, en tanto es en éste que se deberá juzgar al extraditable. Señala que, en el presente caso, aun no ha operado la prescripción de la acción penal por los hechos que se denegó la extradición de Víctor Preston. Por esto solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se conceda la extradición por los cargos 78 y 79 en contra del mismo y que fueron denegados en la sentencia de instancia. Se declara con lugar el reclamo. Efectivamente constata esta Cámara de Casación un error en la aplicación de las reglas de prescripción de la acción penal por parte del juez de instancia. Dicho error consistió en decretar prescritos unos de los cargos utilizando solamente las reglas de prescripción de nuestra legislación procesal, pero sin tomar en cuenta que existe un Tratado entre Estados Unidos de Norteamérica y nuestra Nación, por lo que debe aplicarse el mismo. Tal y como lo plantea el abogado de la Procuraduría General de la República el tema está resuelto en dicho tratado al exigir que las reglas de prescripción que deben considerarse serán las del Estado requirente, incluso aun sin que se tuviera esta regulación, no se puede resolver un tema como el presente, sin tomar en cuenta la legislación interna del Estado requirente. Asimismo, también es cierto que la Sala Constitucional se ha pronunciado sobre ese mismo punto, avalando que se proceda de esa forma, (cfr. Voto 2001-1722 de 14:36 horas del 28 de febrero de 2001). Es además un asunto lógico desde la perspectiva jurídica en tanto, será el Estado requirente quien tiene que juzgar y tramitar la causa penal respectiva, de manera que debe ser en éste donde no hubiera declinado la potestad punitiva estatal por el transcurso del tiempo. Precisamente fue en ese sentido que se pronunció la Sala Constitucional en el voto de cita al decir: "situación que no se produce en el caso que nos ocupa en que el tratado ha establecido que el plazo de prescripción es el de la legislación del Estado requirente, y la Sala estima, además, razonable la disposición en tanto será en aquella jurisdicción y no en la nacional en la que el extraditable será juzgado." En este caso,

conforme lo expresa el impugnante, sin que se haya demostrado lo contrario, el delito que se les acusa y que en nuestro país constituye la posible figura del perjurio, conforme la legislación norteamericana, no ha prescrito. Por lo tanto debe acogerse el reclamo y por tratarse de un error en la aplicación de las reglas previstas en el tratado de extradición, lo que corresponde es resolver en definitiva el tema planteado, sin que tenga ningún sentido el reenvío. En consecuencia se revoca parcialmente la sentencia 229-06 de las 8:00 del 10 de noviembre de 2006 y que completó la resolución de ese mismo número de las 7:30 horas del 13 de marzo de 2006 únicamente en cuanto denegó la extradición por los cargos formulados en contra de Víctor Preston por el posible delito de perjurio, en su lugar se otorga la extradición también por dichos cargos. [...]

III- Recurso de apelación del licenciado Jorge Granados Moreno, abogado director de los extraditables Jhon Sherman Lipton y Víctor Hawthorne Preston (folios 2916 a 2923). Como fundamento de su recurso, en un primer apartado del mismo reclama: "Inexistencia del delito de estafa". Opina que la diferencias expuestas, por el ad quo, entre el delito de Asociación Ilícita (delito costarricense) y la Conspiración (delito norteamericano) debieron haberle hecho concluir que no existe un delito asimilable en nuestra legislación, menos aun con el delito de Estafa. Señala que en la estafa la conducta requiere ejecución material de los actos externos por parte del agente activo. Plantea que la estafa tributaria nuestra es distinta, no solo porque supone actos de ejecución que lesionen el bien jurídico, sino por el sujeto pasivo, por ello señala que los hechos descritos en el cargo 68 no tienen la particularidad de fundamentar la estafa. Refuerza su planteamiento argumentando que el cargo 68 no es para enjuiciar a sus patrocinados por el engaño contra determinada persona o ente público, sino para enjuiciarlos por una forma de asociación que denominan conspiración, que según las leyes norteamericanas es delito, pero que según su criterio, entre nosotros no lo es, pues comprende las etapas tempranas del "iter crimines". Considera que fue un error que el juzgador utilizar la forma genérica de la estafa, sin tomar en cuenta la estafa tributaria. Sin embargo, advierte que sí cumplió con la obligación de valorar la figura del 274 de nuestro Código Penal pero que no debió ir más allá, por lo que opina que se equivocó al confundir la asociación para cometer determinado delito con el delito mismo. Como un segundo punto del recurso señala "Inexistencia del delito de perjurio". En ese sentido reclama que se hubiera hecho una re-calificación de los hechos que se imputan en los cargos 78 y 79 como el delito de perjurio. Agrega que si se varía la calificación jurídica de los hechos, se podría llegar a autorizar la extradición para que se juzgue a alguien por un delito que no existe en Costa Rica. Afirma que es irrelevante que la acusación se pueda tipificar diferente en nuestro país porque no es aquí donde se va a juzgar. De acuerdo con lo anterior, opina que mediante la recalificación de los hechos se estaría permitiendo que se sancione a alguien por una conducta que no sería delito en nuestro país, en tanto, si se le extradita por el perjurio,

en realidad se le juzgaría por otro delito que no existe aquí y esto implicaría violar el principio de identidad de normas. Por otra parte, argumenta que debe verificarse si la acción penal no ha prescrito en ambas legislaciones respecto al delito de perjurio, y señala que si ya ha prescrito no tendría sentido que se concediera la extradición. Indica que se debe revocar la resolución impugnada.

El recurso debe declararse sin lugar. Lo primero que es necesario aclarar es que el recurrente divide sus alegatos en dos planteamientos distintos. En un primer punto, reclama la variación de la calificación jurídica que hiciera el juez de instancia para descartar el delito de Asociación Ilícita por el cargo 68 atribuido a sus representados, pero admitiendo como otra calificación jurídica para estos mismos hechos, el delito de Estafa. Por su parte, en un segundo apartado del recurso plantea su inconformidad respecto a la calificación jurídica por el perjurio que solamente comprende a los cargos 78 y 79 atribuidos al extraditable Víctor Preston. Sin embargo, resulta que sobre estos cargos el juez de instancia decretó una prescripción, que si bien es cierto, este Tribunal de Casación, ahora está rechazando, es claro que para el recurrente no existía motivo de agravio en la sentencia que impugna, en tanto no se estaba acogiendo la extradición por esos hechos. Más bien lo que observa esta Cámara, es que el recurrente ha ido copiando sus alegatos de recursos anteriores (ver folio 2308) sin hacer las modificaciones pertinentes al momento de recurrir una resolución que tuvo un planteamiento jurídico diverso a las anteriores. Por esa razón esta Cámara de Casación conocerá del primer alegato expuesto en el recurso, en tanto sobre el segundo extremo, no sólo, no se le había ocasionado agravio en la resolución de instancia, sino que más aún, tal y como se resolvió en el primer considerando de esta resolución, las reglas de prescripción que deben aplicarse son las del Estado requirente y conforme a la calificación jurídica que le dio dicho Estado. Ahora bien, respecto al cumplimiento o no del principio de doble incriminación es necesario retomar que éste se cumple sin necesidad de que exista una identidad absoluta en la descripción de los elementos objetivos y normativos del tipo, basta con establecer que la acción que se pretende perseguir es delictiva en el país requerido, aun cuando la denominación o calificación jurídica del hecho sea diversa en una y otra legislación. En ese sentido, no es cierto el planteamiento que hace el recurrente sobre la imposibilidad del juzgador de buscar en otra figura penal para decidir si existe o no doble incriminación. Incluso el artículo 3 a) del Tratado de Extradición suscrito por nuestro país y los Estados Unidos de Norte América, expresamente señala que "La extradición será concedida: Independientemente de que las leyes de ambas Partes Contratantes clasifiquen o no al delito en la misma categoría de delitos o usen la misma o distinta terminología para designarlo..." En este caso, previo a resolver el punto que se cuestiona, es necesario hacer un recuento de las resoluciones que se han dictado por parte de esta Cámara de Casación. En una primera oportunidad, según el voto 2005- 1265 de las 8:55 horas del 1 de diciembre de 2005, se anuló la resolución que decretaba la extradición para todos

los sujetos sometidos al proceso, porque el juzgador de instancia hizo un análisis genérico de la situación de cada uno de ellos y de los diversos cargos por los que se solicitaba la extradición. Este error fue subsanado en la resolución siguiente la que, sin embargo, incurrió a su vez en otro error, que fue separar las acciones penales según los cargos que se les atribuía, pero dejando de lado varios de esos cargos, sin tomar en cuenta que el principio de la doble incriminación se podía cumplir con la legislación penal común y no sólo con los delitos de tipo tributario, error que se hizo ver al acoger los reclamos de la Procuraduría General de la República por el rechazo de los cargos 68, 78 y 79 en la resolución que ya se ha citado de este Tribunal N° 2006-1130 de las 10:40 horas del 20 de octubre de 2006. No se debe dejar de lado que la solicitud de extradición que comprende este asunto es compleja, en tanto, no sólo abarca a varios sujetos acusados penalmente, (no todos comprendidos en este proceso) sino que también contiene una gran cantidad de cargos delictivos por hechos realizados durante varios años y en contra de múltiples sujetos afectados, que van, desde personas individuales hasta el Gobierno de los Estados Unidos, en lo que se refiere a la Administración Tributaria Interna ("IRS" por sus siglas en inglés). Sin embargo, es posible observar que existe una conexión entre los hechos o cargos por los que ya se ha aceptado la extradición y que están comprendidos en la sentencia número 229-06 de las 7:30 horas del 13 de marzo de 2006, que se completa con la que ahora se impugna. Concretamente en esa condición se encuentran los cargos 1, 2 al 10, 11 al 18 y 30 a 33. Esta conexión se presenta precisamente con el cargo 68 que ahora es motivo de impugnación por parte de la defensa, porque los hechos que se le atribuyen a los extraditables no sólo involucraron crear una empresa para defraudar a personas físicas, sino también una serie de actuaciones para evadir a la Administración Tributaria Interna. Precisamente es a esa organización criminal a la que se hace referencia en el cargo relacionado con la asociación para delinquir en fraude impositivo (cfr. folio 361 del tomo I en el que se describe la relación de hechos por el cargo 68). Aunque el Juzgador de instancia rechazó la calificación jurídica por el delito de Asociación ilícita, esta decisión no es correcta. Previo a determinar la solución sobre este punto es necesario realizar la siguiente observación: Para decidir si se cumple con el principio de doble incriminación el ejercicio que debe hacer el Juzgador, tiene que realizarse en dos niveles, primero desde la descripción típica de los elementos objetivos y normativos de los tipos penales por los que se pretende la extradición, y en un segundo nivel, considerar los hechos concretos por los que se persigue al sujeto. Todo con el objetivo de verificar en forma extensa si se cumple con dicho principio. La necesidad de que exista doble incriminación es un límite para la colaboración estatal que comprende el procedimiento de extradición, pero no implica que el Estado requirente tenga que atenerse a la calificación jurídica que nuestro país le da a los hechos, lo contrario supondría una imposición de nuestra legislación al país que requiere nuestra colaboración. Por otra parte, siendo que la extradición supone un ejercicio de poder, e incluso, una limitación a la libertad del ciudadano que se

encuentra protegido por el Estado de Derecho de nuestro territorio, no podría un juez de la República limitar esos derechos si no existe una norma penal que justifique la intervención punitiva estatal. En este caso, si se toma la descripción típica del cargo 68 atribuido a cada uno de los extraditables se tiene que la Sección 371 del Título 18 del Código de los Estados Unidos Asociación para delinquir indica en su primer contenido lo siguiente: "Si dos o más personas participan en una asociación ya sea para cometer cualquier delito en contra de los Estados Unidos o para estafar a los Estados Unidos o a cualquier agencia..." (cfr. folio 305 del I tomo). Por su parte, el artículo 274 del Código Penal costarricense señala: "Será reprimido con prisión de uno a seis años, quien tome parte en una asociación de dos o más personas para cometer delitos, por el solo hechos de ser miembro de la asociación..." Esta normas son ligeramente diferentes, pues, como se puede ver de su literalidad, en el caso de la previsión Norteamericana, podría darse una asociación para cometer un único delito, mientras que, la previsión típica de nuestra legislación, requiere, dentro de su contenido injusto, un cierto grado de permanencia organizacional para la comisión de una pluralidad de delitos; sin embargo, en el caso específico de la atribución de cargos a los extraditables, dicha diferenciación no reviste ninguna relevancia, toda vez que, como puede verse del contenido fáctico atribuido, es claro que el supuesto de hecho que nos ocupa, la organización si tenía ese objetivo delictivo plural, por lo que, la conducta sería tanto punible conforme a la norma estadounidense, como a la costarricense. Ahora bien, más allá de la descripción típica de los hechos acusados, lo que hasta ahora no se ha tomado en cuenta, es que tratándose del delito de conspiración por el que se está solicitando la extradición según el cargo 68, existe una disposición expresa en el Tratado de cita, para que la extradición tenga que ser aceptada por ese delito, es así como el artículo 2 inciso 2) del mismo señala: "La extradición también se concederá por la tentativa de cometer, o por la participación en la comisión de cualquiera de los delitos estipulados en el párrafo 1) de este Artículo. Igualmente, será concedida la extradición por la asociación ilícita contemplada en la legislación costarricense respecto de cualquier delito estipulado por el párrafo 1) de este Artículo, o por La conspiración prevista en la legislación de los Estados Unidos de América respecto a los delitos mencionados." (El subrayado se suple). De manera que no sólo se trata de que sí existe adecuación típica en lo que se refiere a la descripción normativa de ambos delitos, sino que más aun, prevalece por encima de la ley interna, la relación expresa que contiene este tratado entre el delito de asociación ilícita y el delito de conspiración. Por esas razones no se aceptan las objeciones de la defensa técnica de los extraditables Jhon Sherman Lipton y Víctor Hawthorne Preston. En consecuencia, se declara sin lugar su recurso de apelación."

6. Asociación Ilícita y Confección de Documentos Falsos

[Sala Tercera]^{xv}

Voto de mayoría

"III. [...] De acuerdo con el marco fáctico acreditado por los Juzgadores, Carlos Durán Lostalo y Manuel Enrique Rueda Araya, actuando de común acuerdo y previa distribución de funciones, estaban confeccionando y expendiendo Revisiones Técnicas y demás documentos de RITEVE falsos, otorgando dicho servicio –por el monto de treinta y cinco mil colones (35.000,00)- a aquellos vehículos que no hubieran pasado esa acreditación. Para arribar a tal conclusión, el a-quo valoró las declaraciones de Michael Zúñiga Martínez y Juan Alberto Segura Agüero, quienes hicieron referencia a la información confidencial que se había recibido en RITEVE, de que de esas oficinas estaba saliendo papelería original y que un sujeto (quien se determinó era Durán Lostalo), obtenía documentación original de dicha empresa porque era novio de una de sus funcionarias, y que además, tenía un contacto (un “gavilán”) en el Registro Público de Zapote, quien vendía las Revisiones Técnicas que él le proveía. En virtud de lo anterior, el 5 de marzo de 2003, Zúñiga Martínez se presentó al Registro Público, fungiendo como agente encubierto, para solicitar la Revisión Técnica del vehículo placas 239613, con el fin de contactar al “gavilán” que estaba trabajando con Durán Lostalo, encontrándose con el encartado Rueda Araya, quien le ofreció su ayuda y le dio el número de su celular por si decidía hacer el negocio. Así, al día siguiente (o sea, el 6 de marzo), Zúñiga Martínez regresó con diez mil colones (10.000,00) para formalizar el negocio y quedó con el justiciable, en darle el dinero restante al día siguiente, día en que Durán Lostalo se presentó al parqueo de “Mc Donald’s” que se encuentra frente al Registro Público y le entregó a Rueda Araya en un sobre de manila, la documentación falsa que acreditaba que dicho vehículo había pasado la Revisión Técnica con defecto leve, cuando según los registros de RITEVE, el mismo había sido rechazado por falta grave. Posteriormente, en un restaurante chino cercano, Rueda Araya le entregó el sobre referido a Zúñiga Martínez, quien a su vez, le entregó el resto del dinero que había sido previamente negociado. Para darle solidez a la prueba con la que se contaba, el 24 de abril del mismo año se planeó un operativo con billetes “marcados”, para que el agente encubierto fuera otra vez donde Rueda Araya con el fin de que le ofreciera los servicios, esta vez para el vehículo placas CL-45232, el cual se encontraba en estado deplorable. Así, se repitió la dinámica de la diligencia realizada el día 7 de marzo anterior, siendo que luego de la misma, Rueda Araya fue detenido por los Oficiales del Organismo de Investigación Judicial que participaron en dicho operativo y observaron lo acontecido, decomisándosele los billetes previamente identificados y secuestrándose además otros documentos similares de Revisión Técnica. Igualmente, al agente encubierto se le secuestró la tarjeta de Revisión Técnica que le había sido entregada por Rueda Araya minutos antes. Además de los

testimonios referidos, se contó con la declaración vertida por Héctor Sánchez Ugalde, lográndose corroborar con su dicho que los encartados estaban actuando de común acuerdo y con distribución de funciones en los delitos por los que se les condenó. También, se bastanteó la prueba documental incorporada, consistente –en lo que interesa–, en las actas de secuestro de objetos, tanto en la vivienda de Durán Lostalo como en el vehículo marca Honda Acura en el que éste viajaba. En cuanto a los objetos incautados en su vivienda, se encontraron sobres de manila con “stickers” de Revisión Técnica válidos para el año 2004 y una agenda donde estaban apuntadas gran cantidad de placas de vehículos. Además, en el vehículo se secuestraron entre otras cosas, varias tarjetas de Revisión Técnica, dos sellos de hule con la inscripción RTV “car” y otro con RTV “SJP”; una almohadilla de tinta para sellar, un tintero, hojas en blanco con el logotipo de RITEVE; un formulario de Informe de Revisión Técnica y “stickers” de RITEVE (Ver folios 527 y 528). Por su parte, a Rueda Araya se le decomisaron materiales que lo ligaban con Durán Lostalo, según las actas de secuestro # 287788 y 287789, visibles a folios 78 y 79, concretamente, un sobre de manila con Revisiones Técnicas y otros documentos que el encartado, antes de ser detenido, había depositado en el vehículo de Fanny Vargas Rodríguez, el cual fue registrado con su consentimiento. En dicho sobre, se encontraron huellas dactilares de Rueda Araya, siendo que algunos de los documentos que se encontraban en el mismo, luego de ser sometidos a análisis por parte de la Sección de Documentos Dudosos del O.I.J., resultaron falsos, como por ejemplo los informes de Revisión Técnica numerados 034090, 036237 y 0362408 (ver folio 549), porque no presentaban los sistemas de seguridad propios de los originales (como marcas de agua y fibrillas de seguridad). Otra prueba importante, en criterio de los Juzgadores, consistió en el hecho de que en RITEVE de Alajuelita se había extraviado un sello de la parte administrativa desde el 28 de diciembre de 2002, específicamente del sitio en que laboraba para esa época la novia de Durán Lostalo, sello que coincidía con uno de los secuestrados en el vehículo en que viajaba Durán Lostalo, lo que para los Jueces, explicaba que la documentación expedida por los imputados tuviera algunas características de los documentos originales. Con base en toda la prueba evacuada, se estimó que los encartados conocían la falsedad de los documentos que estaban poniendo a circular, primero, porque no eran personas autorizadas para expender esos documentos en la vía pública y además, por el material para falsificar que fue confiscado y también, se concluyó que ambos encartados actuaron en colusión, con pleno dominio del hecho y que de no haber sido así, la acción no se hubiera consumado, condenándoseles por un delito de falsificación de documento público y uso de documento falso en concurso ideal y de un ilícito de tenencia de instrumentos de falsificación en concurso material. Ahora, al analizar si la conducta descrita configuraba el delito de asociación ilícita, indicó el Tribunal de mérito que: *“... para que se constituya esta delincuencia debe demostrarse plenamente que los sujetos tenían toda una organización estructurada para delinquir, y en el caso concreto no llega a demostrarse la existencia de esta organización, pues si*

bien es cierto, actuaron de común acuerdo en la realización de la actividad ilícita que estaban desplegando para la consumación del delito de falsificación de documento y uso de documento falso aquí investigado, no por ello puede considerarse que tenían organizada toda una estructura dedicada a la comisión de hechos ilícitos, pues por el contrario la prueba acredita que el ligamen entre los dos sujetos fue circunstancial y no reiterativo, el Ministerio Público no logra acreditar que los encartados hubieran realizado otros hechos similares al aquí investigado, para tener por constituida la organización para delinquir. Se aportó por la representación del Ministerio Público un listado de llamadas del número telefónico, celular 372-1863, número que según informe del ICE, aparece registrado a nombre de Durán Lostalo, existiendo en el listado de llamadas, varias que corresponden al número 354-0962 que es el que según el agente encubierto, Rueda Araya le dio para que lo contactara, una vez que tuvieron su primer encuentro, si se decidía a ocupar sus servicios, más no se investigó si ese número telefónico efectivamente es el del celular de Rueda Araya, ni se aportaron otras evidencias que den fe de la organización como tal, ni de otros hechos ilícitos entre ellos cometidos con anterioridad. En consecuencia, al no configurarse los elementos que el tipo penal prevé, esta cámara estima que la asociación ilícita no se configura.” (ver folios 551 y 552). Pues bien, se comparte el criterio de los Juzgadores, al estimar que en este caso no concurren los elementos objetivos y subjetivos del delito de asociación ilícita, contemplado en el artículo 274 del Código Penal. Como lo ha indicado esta Sala, el hecho de que exista un plan previo entre los encartados para cometer uno o varios delitos (en este caso, consistente en que Rueda Araya iba a vender las Revisiones Técnicas y la documentación de RITEVE falsas que Durán Lostalo le proveyera), no puede equipararse con el ilícito cuya inaplicación se reclama. De esta manera, a pesar de que se logró identificar con claridad cuál era la función que cada uno de los encartados tenía, y aunque se procedió a “...desarticularlos para evitar que a futuro continuaran en dicha ilicitud...” (ver folio 545), no se logró establecer con el grado de certeza requerido –como lo entiende quien impugna-, que la relación existente entre ambos sujetos constituyó efectivamente una asociación para la comisión de delitos. Por lo tanto, no pudiendo descartarse que se tratara de una relación casual, era imposible dictar una sentencia condenatoria por la asociación ilícita. En consecuencia, al no observarse ningún vicio en la fundamentación del fallo ni en la normativa de fondo aplicada en este caso, se rechaza la gestión planteada por la abogada María Gabriela León Mora."

7. Aspectos a Considerar en la Configuración del Delito de Asociación Ilícita

[Sala Tercera]^{xvi}

Voto de mayoría:

"III. [...] Es procedente recordar, que la figura prevista en el artículo 274 del Código Penal [asociación ilícita], es: *"... un delito doloso en el que necesariamente la intervención de los sujetos debe reflejar el conocimiento de que forman parte de ese grupo que procura perpetrar ilícitos y el propósito de querer integrarlo. No es necesario que el mismo se constituya formalmente, mediante un pacto expreso, sino que la unión de esfuerzos puede darse tácitamente, por medio de conductas que unívocamente reflejen el ánimo de integrar esa agrupación delictiva. "Tomar parte" no es más que ser integrante de la asociación; no se requiere, entonces, que se intervenga directamente en ejecutar los hechos punibles, sino que es suficiente ser miembro de la organización, de forma tal que participe de cualquier manera en el funcionamiento de la misma (lo cual puede ocurrir si, por ejemplo, se interviene en el planeamiento de los "golpes", si se dirigen éstos, si se coordinan actividades del grupo e, incluso, si se participa en el reparto de los dividendos). El que es integrante de la asociación es autor del delito de comentario (...)* Oportuno es recordar que lo que se castiga es la pertenencia al grupo, independientemente de la participación individual de los sujetos en cada uno de los hechos atribuidos al grupo...", (Sala Tercera, # 885, de las 8:45 horas del 14 de setiembre de 2001). [...] Tal y como se expuso con anterioridad, en el fallo se hace ver cómo el encartado mantenía estrechos vínculos con "Karla", "Adriana" y "Johana", siendo que policialmente se sabía que en casa de ésta última se planeaba la comisión de otros delitos (se mencionan secuestros "express") y ambas mujeres externaron su preocupación por que todo les saliera bien a los "panameños" y al "salvadoreño", en clara referencia a Aguilar Méndez. La información policial tiene asimismo sustento en las llamadas interceptadas, de las que se extrae un seguimiento policial, en el que "Alfonso" tuvo que realizar maniobras para "perder" a la policía (cfr. folio 773). Nótese que esta acción, por sí misma, es reveladora del conocimiento que tenía el justiciable acerca de las actividades a las que se dedicaban sus amigos y de su voluntad de formar parte en sus actividades. Pero unido a ello, el examen concatenado de los indicios da cuenta no sólo de que Aguilar Méndez conocía íntimamente al resto de los coencartados, sino también a las mujeres que rentaron al grupo, un vehículo con el que se presume se trasladó Mejía Caballero para dar muerte a Méndez Vega y que fue hallado con el motor "fundido" en la Zona Sur (cfr. folios 1670 y 773, donde se establece incluso que él durmió en casa de una de esas mujeres). También señalan los Juzgadores de instancia, que el vehículo Toyota Rav-Four, que conducían los coencartados cuando se les detuvo el 3 de julio de 2002, fue rentado por Johanna Jiménez Rosero, quien es precisamente una de las citadas mujeres (cfr. folio 1498 fte. y vto.). Aunque ya se ha referido que el tipo penal de asociación ilícita no requiere que la

agrupación para delinquir sea sofisticada o que permanezca por un largo período de tiempo (al respecto, ver Sala Tercera, Nº 939, de las 9:55 horas del 24 de octubre de 2003), en la especie basta el lapso comprendido en la investigación, para determinar que los co-encartados se mantuvieron vinculados con fines criminales por espacio de varios meses (cfr. folios 692 a 782). De la permanencia del grupo, no sólo dan cuenta los datos aportados por las autoridades panameñas, las cuales venían dando seguimiento a la banda conformada, entre otros, por los inculcados en esta causa, por delitos cometidos en ese país. También se tiene la referencia de la testigo Díaz Ruiz (la que los acogió en su casa) y quien se refirió a los panameños como un grupo, al decir que a ellos los conocía como “sicarios”. Adicionalmente, las llamadas telefónicas interceptadas, que el a-quo se ocupa de transcribir y analizar en el fallo, dan cuenta de que se trataba de un grupo estable en que sus miembros se conocían bien entre sí (cfr. especialmente, folios 767-768 y 768 a 774). Debe concluirse, por lo consiguiente, que no existe duda acerca de que los co-encartados conformaban una banda u asociación con fines criminales y que, aunque en virtud del principio in dubio pro reo el Tribunal de instancia resolvió que no resultaba procedente condenar a Aguilar Méndez por los ilícitos cometidos en perjuicio de Exlisson Chacón Navarro y Santos Méndez Vega, del cuadro fáctico probado y el acervo probatorio que le sirve de sustento se puede establecer sin visos de duda, que Aguilar Méndez era un integrante más de la banda, que entre otras actividades funcionaba como chofer y que se vinculó al resto de los sindicados con pleno conocimiento de la naturaleza del grupo y con el fin de participar con ellos en la comisión de delitos. Esto es posible, porque tal y como lo ha referido la Sala Constitucional: “... *El delito de asociación ilícita es un delito independiente de aquellos delitos susceptibles de cometerse como parte de las finalidades de la organización, de manera que es posible que se de un concurso entre aquél y éstos. (...) En el caso del delito de asociación ilícita es claro que la sola pertenencia a una organización destinada a cometer delitos, es violatoria del orden público y así lo ha entendido el legislador, en ella existe una conducta ya externada, ejecutada, la de formar parte en la asociación con la finalidad establecida en la norma. En consecuencia, el legislador está legitimado para sancionar dicha conducta, independientemente de que pueda ser un acto preparatorio para la consumación de otros ilícitos diferentes...*”, (Así Sala Constitucional, voto # 2000-01575, de las diez horas con nueve minutos del dieciocho de febrero del dos mil).» Por otra parte, la circunstancia de que no se integraran al proceso en calidad de imputados otros eventuales partícipes en los hechos investigados, tal como el individuo conocido como: “Cinco de queso”, no desmerece la efectiva pertenencia de Aguilar Méndez a la agrupación con fines delictivos, conformada por Ricaurte Villasanta Restrepo, Carlos Yamil Mejía Caballero, Armando Rojas Nieto y Marvin Castro Sánchez. En consecuencia, **se declaran sin lugar** los reclamos de fondo y forma deducidos por los licenciados Cubillo Sánchez y López Marchena.

8. Indicios Válidos para Determinar la Comisión del Delito de Asociación Ilícito

[Sala Tercera]^{xvii}

Voto de mayoría

"IV. PRIMER MOTIVO POR EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO POR EL DEFENSOR OSCAR MARIO MURILLO ZAMORA: En el primer y único motivo por el fondo del reclamo planteado por el defensor Oscar Mario Murillo Zamora, se alega violentada la ley sustantiva, específicamente el artículo 274 del Código punitivo. En criterio del recurrente, los hechos tenidos por ciertos en sentencia no configuran el delito de asociación ilícita, pues se tratan de simples hechos cometidos en concurso material, sin que tengan como base una agrupación permanente en el tiempo, con intención en abstracto de cometer delitos. El gestionante hace algunas referencias a los autores de los ilícitos de robo, a su marco temporal y al nivel organizacional evidenciado. Señala, que: *"... es por ello que estima esta representación que el tribunal yerra en la aplicación de la norma del artículo 272 del Código Penal por cuanto no se desprende de los hechos probados que se acreditan los elementos típicos de ese ilícito: estructura organizativa, permanencia del grupo intención de cometer delitos indeterminados..."*. (ver folio 1723). Solicita casar la sentencia y absolver a los inculpados del delito de asociación ilícita por el que se les condenó. **El reclamo no es atendible:** Si bien es cierto esta Sala ha reconocido de manera expresa la posibilidad de controlar en casación la aplicación del principio *in dubio pro reo*, no a través del valor otorgado a elementos probatorios recibidos en forma oral, pero sí partiendo de los razonamientos hechos por el a quo, (SALA TERCERA, fallo número 158-F-94, de 8:45 horas del 20 de mayo de 1994), esta posibilidad no resulta aplicable a aquellos casos en que se reclame violación a la ley sustantiva. En el reparo de casación por el fondo rige todavía el principio de intangibilidad de los hechos que se estimó demostrados. El reclamo de fondo debe basarse en el marco fáctico acreditado en sentencia y no en los sucesos que el recurrente considere acreditados, con base en su personal y subjetiva valoración de la prueba. Si la defensa no comparte los hechos ciertos del fallo, debe combatirlos mediante el recurso por violación al principio *in dubio pro reo* o por carencia de fundamento de lo resuelto, entendiendo que según el artículo 142 del ordenamiento procesal de la materia, cualquier preterición a las reglas de la sana crítica, se considera falta de fundamento del fallo. Antes de crearse la actual Sala Tercera, la jurisprudencia de las Salas Penales de esta Corte Suprema de Justicia había admitido el reclamo de vicios procesales que incidieran en la aplicación de la ley sustantiva mediante el denominado recurso por violación indirecta a la ley de fondo, posibilidad rechazada por la jurisprudencia actual de la Sala Tercera (véase: SALA SEGUNDA PENAL, resolución número 41-F-77 de 16:30 horas del 23 de junio de 1977 y SALA TERCERA, número 82-A-96, de 8:35 horas del 16 de agosto de 1996). Esto no

significa que los reclamos en los que se alegue violación indirecta de la ley sustantiva, deban declararse inadmisibles. Sin embargo, tal defecto de formulación sí incide en lo que en definitiva resuelva la Sala. En el presente caso, el reclamante afirma que: “... *no se desprende de los hechos probados que se acreditan los elementos típicos de ese ilícito: estructura organizativa, permanencia del grupo intención de cometer delitos indeterminados...*”, pero al referirse a esos elementos, valora subjetivamente las pruebas evacuadas, en contra de lo dispuesto por el Tribunal. Así por ejemplo, pese a que el a quo en el primer hecho que estimó verídico, acreditó que: “... *durante el año 2002 los acusados Edwin Ricardo Jiménez Hidalgo, Alexander Mosquera Segura y Manuel Cruz Pérez formaron parte de una asociación criminal dedicada a cometer delitos contra la propiedad, contra la libre determinación y la libertad en general de las personas...*”, (ver folio 1436), el recurrente niega la existencia de esa estructura organizativa (ver folio 1720, *in fine*). Este tipo de argumentación es inaceptable, pues el interesado considera indebidamente aplicado determinado tipo penal, partiendo de la negación subjetiva y unilateral de los hechos probados. En todo caso, el tipo objetivo de la asociación ilícita se compone por el núcleo verbal, que consiste en ser miembro o formar parte de determinada agrupación. El objeto del delito lo configura una asociación que tenga como finalidad cometer hechos delictuosos. En el tipo subjetivo no se encuentran elementos distintos del dolo, pues la finalidad de cometer hechos ilícitos, es una característica de la asociación y no del sujeto activo. El tipo penal contenido en el artículo 274 del Código sustantivo, no se refiere al tipo de asociación en cuanto a que deba ser grande en tamaño, o muy compleja o sofisticada, salvo por el requisito de que debe constar al menos de dos integrantes, exigencia que resulta por demás entendible. Todos esos componentes se acreditan tanto en la lista de hechos probados del fallo, como en su sustento intelectual, no observando esta Sala el agravio alegado por el recurrente. Por las razones expuestas, **se rechaza el reclamo.**

V. PRIMER MOTIVO POR LA FORMA DEL REPARO PRESENTADO POR EL DEFENSOR OSCAR MARIO MURILLO ZAMORA: En el primer motivo del recurso de casación por la forma, alega preteridas las reglas de la sana crítica. Estima el gestionante, que el Tribunal tuvo como hecho probado, que: “... *durante el año 2002 los acusados Edwin Ricardo Jiménez Hidalgo, Alexander Mosquera Segura y Manuel Cruz Pérez formaron parte de una asociación criminal dedicada a cometer delitos contra la propiedad, contra la libre determinación y la libertad en general de las personas...*”. (ver folio 1726). Reclama que el a quo llegó a dicha conclusión, tomando en cuenta el marco temporal y espacial en el que se dieron los delitos cometidos contra la propiedad, así como el nivel organizacional y división de funciones apreciada entre los justiciables. Alega, que del suceso de que todos los delitos de robo ocurrieran en enero de 2002, no puede concluirse en la existencia de una organización, dada la brevedad del lapso transcurrido. Por otro lado, apunta que la cercanía territorial de los latrocinios, así como el modo de operar en ellos, no son requisitos esenciales del tipo penal de asociación ilícita y a su juicio no existe organización, pues los imputados actuaron en

forma improvisada. Considera, que en el caso concreto hay un concurso material de delitos contra bienes jurídicos determinados, sin existencia previa de una organización, con el fin abstracto de cometer actos ilícitos. Solicita anular la sentencia y reponer el juicio oral. **El reclamo no es atendible:** El tipo penal contenido en el artículo 274 del Código sustantivo no se refiere al tipo de asociación en cuanto a que deba ser de gran tamaño o muy sofisticada, salvo por el requisito de que debe contar al menos con dos integrantes. Tampoco hace referencia a la necesidad de que la asociación permanezca por un espacio de tiempo largo, siendo factible la existencia de asociaciones de corta duración. El recurrente confunde los indicios utilizados por el Tribunal, para acreditar la existencia de una asociación compuesta por al menos dos personas, con el fin de cometer hechos ilícitos, con los requisitos objetivos del tipo penal. Es claro, que la cercanía territorial de los delitos contra la propiedad cometidos por los imputados, la distribución de funciones entre ellos, así como su ubicación dentro de un período de tiempo determinado, son indicios utilizados por el a quo para acreditar válidamente la existencia de la asociación ilícita y no requisitos descriptivos o normativos del tipo. Por esa razón, **se rechaza el reclamo.**"

9. Constitucionalidad del Delito de Asociación Ilícita

[Sala Constitucional]^{xviii}

Voto de mayoría

El artículo 274 del Código Penal dispone:

*"Artículo 274.—**Asociación ilícita.** Será reprimido con prisión de uno a seis años, quien tome parte en una asociación de dos o más personas para cometer delitos, por el solo hecho de ser miembro de la asociación.*

La pena será de seis a diez años de prisión si el fin de la asociación es cometer actos de terrorismo o secuestro extorsivo."

(Así reformado por el artículo único de la Ley N° 8127 de 29 de agosto del 2001)

Este Tribunal analizó por el fondo el contenido del artículo 274 del Código Penal (antes art. 272) en la sentencia número 01792-a de las dieciocho horas cincuenta y cuatro minutos del nueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve, en la cual indicó:

*"V. ... En el texto transcrito queda descrita de forma suficientemente clara una conducta atribuible a una persona, cual es la de "tomar parte en una asociación de dos o más personas **para cometer delitos**".-*

Es eso lo que se castiga y por lo tanto sí existe una conducta específica que resulta sancionable cuando se configura, independientemente que en algunas situaciones

resulte ser actividad preparatoria para la comisión de otros delitos. No hay tampoco violación del principio de tipicidad cuando se establece la condición de la asociación sea para "cometer delitos" sin que se defina cuales son, pues lo cierto es que las conductas que constituyen delito están clara y taxativamente definidas por la legislación y, desde luego, la discusión sobre si una conducta concreta encuadra o no en la descripción hecha en la norma, para efectos de tener como existente la asociación ilícita, se debe resolver en la sede jurisdiccional, como parte de los elementos constitutivos del tipo penal, lo que implica la aplicación de todas las garantías constitucionales para el imputado. Resta analizar la cuestión relativa a la inexistencia de un bien jurídico que dé soporte constitucional a la decisión legislativa de punir la conducta definida en el artículo 274, pero como ya se ha dicho, la cuestión no consiste en tratar de subsumir o relacionar esta figura delictiva exclusivamente con alguno de los bienes jurídicos protegidos en el Código Penal, sino que en definitiva lo que la Sala debe controlar es el apego de la actuación legislativa en esa materia, a sus límites establecidos constitucionalmente, particularmente por el artículo 28 Constitucional; y en tal sentido, resulta muy claro que tomar parte de una organización para cometer delitos, es una actividad claramente alteradora de la normal convivencia que pretende garantizar el ordenamiento jurídico, de modo que debe admitirse que el legislador está plenamente facultado para tratar de desestimularla mediante una sanción para quienes la realicen.-

VI. *Como conclusión, no existe la violación constitucional que acusa en los artículos 370 y 272 del Código Penal, porque ellos respetan el principio de legalidad criminal y se dirigen a la protección de la sociedad contra actividades que, de quedar impunes, lesionan gravemente el orden público, de modo que no constituyen una extralimitación de las facultad legislativa para establecer sanciones."*

El accionante no aporta nuevos argumentos que motiven a esta Sala a cambiar el criterio vertido en la sentencia parcialmente transcrita. En efecto, y tal y como se indicó en ella, no se trata de sancionar a una persona por lo que es o piensa ser o hacer. Resulta, evidentemente, un asunto más complejo que eso. Se trata de sancionarla por tomar parte en una asociación cuyo objetivo es la comisión de delitos, hecho que por sí mismo afecta la tranquilidad pública y amenaza el orden social establecido, bien jurídico protegido, que para este Tribunal es, además, socialmente relevante. El concepto "tranquilidad pública" es una condición subjetiva, una sensación de paz presente en los miembros de la sociedad, nacida de la confianza que sienten de vivir en un ambiente de paz social. La existencia de grupos de personas organizadas con el objeto de romper ese clima de tranquilidad atenta contra la existencia misma del Estado de Derecho, uno de cuyos objetivos es garantizar a sus ciudadanos un clima social que les permita vivir y trabajar con tranquilidad. Es claro que no se trata de una figura de resultado, en cuanto no se sanciona un daño o lesión concreta; lo que origina es una situación de peligro que genera incertidumbre e inseguridad en los ciudadanos.

Por ello, el tipo penal se configura en tanto la conducta descrita se verifique, es decir, se tome parte en una asociación cuyo objetivo sea ejecutar -o intentarlo (actividad preparatoria)- un hecho o hechos delictivos. Cualquier acción privada que se aparte de lo dispuesto en el artículo 28 Constitucional, es decir, que lesione o tenga potencial para lesionar la moral y el orden público o perjudique a terceros, es susceptible de ser regulada por el legislador con el objeto de preservar la paz y el orden constitucional correspondiente, para lo cual cuenta con una amplia discrecionalidad, cuyo único límite serían los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

10. Asociación Ilícita y Delito de Robo

[Tribunal de Casación Penal de San José]^{xix}
Voto de mayoría

"El Tribunal de Casación de oficio aprecia un vicio en la calificación jurídica de los hechos, que en definitiva puede tener incidencia en la penalidad que en definitiva le corresponda al imputado Segura Rodríguez. En efecto se le condenó por el delito de asociación ilícita, imponiéndosele un año de prisión, pero los hechos tenidos por probados no hacen referencia a un delito de esa índole, sino simplemente a que los diversos imputados se pusieron de acuerdo para la comisión del robo de la joyería. Precisamente esa realización conjunta del robo es una de las circunstancias por las que se agrava el delito de robo, de acuerdo con los Arts. 213 inciso 3) y 209 inciso 7) del Código Penal, por lo que es ilógico y contrario a las reglas sobre los concursos que por el acuerdo de cometer un solo hecho delictivo de robo se llegue a aplicar no solamente el delito de robo agravado, sino además el de asociación ilícita. Se agrega a ello que el tipo penal del Art. 274 del Código Penal exige que la asociación esté destinada a la comisión de delitos, no siendo suficiente, de acuerdo con el principio de legalidad, la constitución de una asociación para cometer un solo delito, como es de lo que se parte en este caso. Por ello corresponde revocar la condenatoria por el delito de asociación ilícita decretada en contra de Marlon Segura, beneficiándose del efecto extensivo Londy Ronald Ortega. Existen también problemas de calificación con respecto a la condenatoria a Marlon Segura por dos delitos de robo, uno en perjuicio de Ana Iris Chavarría Arias y el otro en contra de Jorge Vargas Castillo. Téngase en cuenta que este último se encontraba en la joyería cuando se produjo el asalto a la misma, siendo encañonado y obligado a entregar las llaves de su vehículo, el que se encontraba aparcado fuera, procediendo el imputado Marlon Segura junto con los otros imputados a sustraerlo para darse a la fuga. No puede estimarse que hayan ocurrido dos delitos de robo agravado, sino más bien debe considerarse que se trató de un solo delito. Téngase en cuenta que la acción desplegada en contra de Jorge Vargas se dio como parte de la acción desplegada en la joyería, puesto que incluso él se encontraba en la misma como cliente, siendo encañonado. Toda la acción de robo llevada a cabo

en la joyería debe ser estimada como una unidad de acción, resultando que el hecho de que sean dos personas diferentes las afectadas en cuanto a su derecho de propiedad, ni el hecho de que la violencia para la ejecución del robo en la joyería se haya ejecutado en contra de diversas personas. Considérese en cuenta que no es que los imputados deciden sustraer el vehículo de Jorge Vargas cuando ya se encuentran fuera de la joyería, sino es en el contexto del robo de la misma en que deciden sustraer el vehículo y la violencia que realizan para ello es ejecutada en la joyería y en medio del asalto, ello al amenazar a Jorge Vargas para que les entregara las llaves de su vehículo, lo que en efecto hizo éste. Por ello no puede estimarse que se esté ante dos robos agravados, sino debe partirse que se está ante uno solo. (Véase en sentido similar: Tribunal de Casación Penal, voto 784-2000 del 6 de octubre del 2000). Así procede recalificar los hechos por los que se ordenó la sentencia condenatoria, estimándose que el imputado Marlon Segura Rodríguez cometió un delito de robo agravado en perjuicio de Ana Iris Chavarría Arias y de Jorge Vargas Castillo. El hecho de que se estime que solamente se cometió un delito de robo agravado, no lleva a que se proceda necesariamente a imponer la pena de cuatro años de prisión, ya acordada con respecto a cada robo que el disvalor de la conducta y de la lesión podría variar si se considera como una unidad de acción lo realizado en contra de Ana Iris Chavarría y lo desplegado en perjuicio de Jorge Vargas Castillo. Por lo anterior se anula la pena impuesta y se ordena el reenvío, solamente con respecto a esta."

ADVERTENCIA: El Centro de Información Jurídica en Línea (CIJUL en Línea) está inscrito en la Universidad de Costa Rica como un proyecto de acción social, cuya actividad es de extensión docente y en esta línea de trabajo responde a las consultas que hacen sus usuarios elaborando informes de investigación que son recopilaciones de información jurisprudencial, normativa y doctrinal, cuyas citas bibliográficas se encuentran al final de cada documento. Los textos transcritos son responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan el pensamiento del Centro. CIJUL en Línea, dentro del marco normativo de los usos según el artículo 9 inciso 2 del Convenio de Berna, realiza citas de obras jurídicas de acuerdo con el artículo 70 de la Ley N° 6683 (Ley de Derechos de Autor y Conexos); reproduce libremente las constituciones, leyes, decretos y demás actos públicos de conformidad con el artículo 75 de la Ley N° 6683. Para tener acceso a los servicios que brinda el CIJUL en Línea, el usuario(a) declara expresamente que conoce y acepta las restricciones existentes sobre el uso de las obras ofrecidas por el CIJUL en Línea, para lo cual se compromete a citar el nombre del autor, el título de la obra y la fuente original y la digital completa, en caso de utilizar el material indicado.

ⁱ ASAMBLEA LEGISLATIVA. Ley 4573 del cuatro de mayo de 1970. **Código Penal**. Vigente desde: 15/11/1970. Versión de la norma: 46 de 46 del 30/09/2014. Publicada en: Gaceta N° 257 del 15/11/1970. Alcance: 120 A.

ⁱⁱ GARRO CANESSA, Jaime. (1983). *El Delito de Asociación Ilícita*, San José, Tesis para optar por el título de licenciado en Derecho. Universidad de Costa Rica, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Facultad de Derecho. p. 136.

-
- ⁱⁱⁱ RIVERA QUESADA, Lilliana y SALAZAR SÁNCHEZ, Ana Militza.(1992). ***La Asociación Ilícita como Instrumento de Control Social***, Tesis para optar por el título de licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Facultad de Derecho. p. 176 y 177.
- ^{iv} GARRO CANESSA, Jaime. (1983). ***El Delito de Asociación Ilícita***. Op cit supra nota ii. p. 166.
- ^v GARRO CANESSA, Jaime. (1983). ***El Delito de Asociación Ilícita***. Op cit supra nota ii. p.p. 173 y 174.
- ^{vi} RIVERA QUESADA, Lilliana y SALAZAR SÁNCHEZ, Ana Militza.(1992). ***La Asociación Ilícita como Instrumento de Control Social***, op cit supra nota iii. p. 185.
- ^{vii} RIVERA QUESADA, Lilliana y SALAZAR SÁNCHEZ, Ana Militza.(1992). ***La Asociación Ilícita como Instrumento de Control Social***, op cit supra nota iii. P. 190.
- ^{viii} RIVERA QUESADA, Lilliana y SALAZAR SÁNCHEZ, Ana Militza.(1992). ***La Asociación Ilícita como Instrumento de Control Social***, op cit supra nota iii. p.p. 194 y 195.
- ^{ix} GARRO CANESSA, Jaime. (1983). ***El Delito de Asociación Ilícita***. Op cit supra nota ii. p.p. 131, 132 y 133.
- ^x TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL DE CARTAGO. Sentencia 244 de las trece horas con cuarenta y siete minutos del doce de junio de dos mil catorce. Expediente: 11-000226-0071-PE.
- ^{xi} SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia 271 de las nueve horas con cinco minutos del veinte de marzo de dos mil nueve. Expediente: 07-018669-0042-PE.
- ^{xii} SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia 808 de las diez horas con cuarenta minutos del diez de agosto de dos mil siete. Expediente: 04-017297-0042-PE.
- ^{xiii} TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL DE SAN JOSÉ. Sentencia 373 de las diez horas con treinta minutos del doce de abril de dos mil siete. Expediente: 06-000038-0016-PE.
- ^{xiv} TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL DE SAN JOSÉ. Sentencia 201 de las ocho horas con cincuenta minutos del veintitrés de febrero de dos mil siete. Expediente: 05-000048-0016-PE.
- ^{xv} SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia 1254 de las nueve horas con cinco minutos del siete de noviembre de dos mil cinco. Expediente: 03-004236-0042-PE.
- ^{xvi} SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia 760 de las diez horas con veinte minutos del ocho de julio de dos mil cinco. Expediente: 02-002727-0042-PE.
- ^{xvii} SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia 939 de las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veinticuatro de octubre de dos mil tres. Expediente: 02-000781-0042-PE.
- ^{xviii} SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia 6225 de las once horas con quince minutos del veintiuno de junio de dos mil dos. Expediente: 02-003539-0007-CO.
- ^{xix} TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL DE SAN JOSÉ. Sentencia 51 de las diez horas del primero de febrero de dos mil dos. Expediente: 00-000959-0061-PE.